



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

AUDIENCIA

Medellín, marzo 16 de 2023

Radicado: 05001- 31- 05-004-2016-01244
Demandante: JOSÉ DUVÁN CEBALLOS SANTA
Demandado: MABE COLOMBIA SAS
Asunto: AUTO DECRETO DE PRUEBAS

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir decisión dentro del proceso ordinario laboral de la referencia,

ANTECEDENTES

Pretende el actor el reajuste de salarios, prestaciones sociales e indemnización por despido injusto en tanto su remuneración incluía rubros para el cubrimiento de vivienda, alimentación, transporte, los que no se reflejaban en el desprendible de nómina en tanto este trabajador como directivo y no beneficiario de la convención colectiva hacía parte de la “nómina privada”.

A efectos de probar el carácter salarial de tales beneficios además de adosar una serie de documentos, solicitar la recepción de testigos, relacionó un listado de documentos que pretende sean aportados por la accionada, a saber: colillas de pagos, constancias de viáticos, documentos que dan cuenta de la impartición órdenes, relación de beneficios pagados por cada año, liquidación de contratos de otros gerentes de igual jerarquía, certificados de ingresos y retenciones desde

1991, planillas de pago al sistema de seguridad social y demás documentos que den cuenta de pagos con ocasión de la relación laboral (pág 7 archivo N° 2)

Admitida la contestación de la demanda, la que contiene documentación que da cuenta de los pagos realizados al demandante (pág 76/99), dentro de la diligencia de que trata el artículo 77 del CPTSS en la etapa de decreto de pruebas el fallador de instancia emitió una directriz genérica respecto a las pruebas en tanto refirió que se incorporaban los documentos obrantes en el expediente, decretó los testimonios solicitados y como exhibición de documentos expuso: “ *se solicitará a la demandada que aporte los documentos no allegados en la contestación de la demanda y solicitados por la parte demandante*” (pág 164/165)

En respuesta a esta orden MABE indicó explicó cuáles de las pruebas se hallaban en su poder e informó:

1. haber aportado las liquidaciones desde el año 2011, la legalización de viáticos entre los años 2013 a 2016, las correspondientes a periodos previos no obran en su poder.
2. No existen documentos que dieran cuenta de las órdenes dadas al actor ora como correos electrónicos, ora comunicados explicando que el plan de viajes era programado por el empleado.
3. Aportó la liquidación del contrato de trabajo de los señores Alexander Sánchez, Severo Rojas, Alejandro Gutiérrez Duarte, Adriana Ulloa y Ana Manotas
4. Documento de beneficio de nómina privada vigente para 2016.
5. Los certificados de ingresos y retenciones no los posee la empresa, deben estar en poder del demandante.
6. Planillas de pagos al sistema pensional de los últimos 3 meses
7. Documentos que dan cuenta de los pagos al demandante

(pág. 171/239)

Luego, en audiencia de práctica de pruebas, tras agotar los interrogatorios de parte y desistirse de escuchar los testimonios, el fallador de instancia consideró que la prueba recaudada era suficiente para emitir una decisión de cara a la

fijación del litigio, por lo que no insistió en los documentos solicitados con la demanda.

Inconforme con tal límite, la activa insistió en la necesidad de la prueba la que en su sentir llevará a determinar cuáles son los ingresos constitutivos de salario, siendo necesarias las colillas de pagos, los documentos de legalización de viáticos, los aportes al sistema de seguridad social, pagos a cualquier título para establecer el salario. Considera que no está completa la documentación, sin que pueda argumentar no tenerlos en su poder, en tanto la ley general de archivo impone tener bajo su custodia la documentación por un plazo de 20 años, pudiendo incluso acceder a los reportes de cotizaciones ora a través de la entidad operadora de pagos, ora a través de las administradoras del sistema de seguridad social. Por tanto, no se trata de un asunto de valoración de la prueba, sino de la suficiencia.

ALEGATOS

Concedido el término que establece el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 la accionada MABE presentó escrito donde reitera sus argumentos de defensa y señala que adosó los elementos de prueba que obran en su poder.

CONSIDERACIONES

Atendiendo a las premisas expuestas corresponde a esta corporación resolver las réplicas de la activa referentes a la práctica de pruebas, asunto que es susceptible del recurso de apelación tal como lo establece el numeral 4° del artículo 65 del CPTSS, donde el fallador de instancia estableció que las pruebas recaudadas son suficientes para resolver la controversia

Al respecto relevante es indicar que en los términos del artículo 53 de CPTSS modificado por el artículo 8° de la Ley 1149 de 2009 puede el Juez rechazar la práctica de pruebas que estime inconducentes o superfluas en relación con el

objeto del pleito. Norma que ha de complementarse con lo reglado por el artículo 168 del CPG que refiere a la posibilidad de rechazar de plano el decreto de pruebas que estime impertinentes, inconducentes, manifiestamente superfluas o inútiles

Análisis que ha de realizarse en el caso concreto en tanto los presupuestos de admisibilidad de la prueba responden a las particularidades de cada reclamación, donde de cara a las pretensiones, la norma aplicable y las reglas de decisión, ha de establecerse la procedencia de la prueba.

Además los artículos 265 y ss del CGP establecen la posibilidad de pedir la exhibición de documentos, lo que parte de la premisa de afirmar que el documento o cosa se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlos, demostración que tiene incidencia cuando exista renuencia a su presentación caso en el cual corresponde al funcionario judicial valorar las razones por las que se rehúsa a la exposición y de considerarlo insuficiente, aplicará una presunción respecto a los hechos que se pretendían demostrar a través de tal medio.

Por otra parte, es relevante indicar que corresponde a las partes y a sus apoderados obrar con responsabilidad, probidad, buena fe y prestando colaboración para el desarrollo del trámite. Deberes que se activan de forma concreta en tratándose de las peticiones probatorias, tal como lo advierte el numeral 10 del artículo 78 y el artículo 173 ambos del CGP, que alude al deber de agotar las herramientas administrativas o judiciales para lograr el acopio probatorio previo al inicio de la acción en tanto es posible al funcionario judicial abstenerse de decretar las pruebas que bien pudieron obtenerse directamente.

Con estas premisas se descende al **caso concreto** donde a efectos de establecer la necesidad del recaudo probatorio es menester detenerse en el alcance y propósito de este litigio.

Es así que la activa desde su acción señala que laboró para la entidad accionada entre el año 1991 a 2016, ocupando varios cargos pero resaltando que a partir de enero de 2011, estando en el cargo de Gerente regional Zona Cafetera se le modificó el salario al incluir un componente básico y otro variable, además de recibir elementos no constitutivos de salario lo que llevó a un desmejoramiento de las condiciones salariales, (hechos 6° a 11°) en particular en el hecho 7° de la demanda reseñó los salario recibidos lo que implicó *“recibir un menor valor por concepto de salarios, cotizaciones al sistema de seguridad social y prestaciones patronales comunes y extraordinarias”* con esta premisa reclamó los reajuste salariales y prestacionales.

Siendo este los aspectos que se incluyeron en la fijación del litigio donde el fallador expuso que el proceso tendría por objeto indagar “si la sociedad desconoció los beneficios de la nómina privada y establecer equivocadamente el IBL al exceder los límites del pacto salarial y prohibición de desmejoramiento al trabajador y de forma consecuencial si hay lugar al reajuste de salarios, prestaciones sociales e indemnización por despido sin justa causa”

Esta definición del pleito nos ubica temporalmente en los hechos materia de discusión y aquellos que serán necesario probar, pues si bien se establece la existencia de una relación laboral iniciada en el año 1991, el demandante aduce que en razón al cambio de cargo y a partir del año 2011 se vulneraron sus derechos al recibir una remuneración inferior.

Así las cosas y sin que emita esta corporación un juicio respecto a la viabilidad o fracaso de las pretensiones, sí es claro que el material probatorio acopiado es suficiente para resolver la Litis y que se satisfizo el listado de pedimentos de la activa en el orden que fueron enlistados en el acápite de exhibición de documentos (pág 7 archivo N° 2) , así:

1. No es necesario adosar ***colillas de pago de periodos previos al año 2011*** en tanto en tales periodos el actor no ubica una reducción de la retribución, aunado

que con la contestación de la demanda se adosaron certificaciones que dan cuenta de los aumentos de salario desde el año 2010 al igual que se da cuenta de la remuneración a la terminación de la relación laboral.

2. **Legalización de viáticos**, la accionada presenta una relación de aquello concedido al actor a partir del mes de septiembre de 2013 (pág 174/176) que si bien no comprende el periodo reclamado, la pasiva fue enfática en informar que no posee información adicional, sin que se denote que se trata de una estrategia evasiva, ni la activa demuestra que existen conceptos más allá de los allí relacionados.
3. Relativo a las **Órdenes dadas al accionante** la pasiva como respuesta expone una negación que no es susceptible de control, en tanto la accionada expone que no existe un registro de ello, lo que lleva a que sea la activa quien demuestre que sí existieron y cuál fue su contenido.
4. Documentos denominado **beneficio de nómina privada**, se adosó y obra en las pág 192/194
5. **Liquidaciones de otros empleados** las que obran entre las pág. 177/191
- 6 y 7. **Certificados de ingresos y retenciones y pago de aportes al sistema de seguridad social** se trata de información que no proviene del empleador y que bien pudo haberse obtenido previo al inicio del trámite o durante el tiempo que este ha tardado requiriendo a las entidades pertinentes, asumiendo la parte actora una actitud pasiva frente a sus deberes probatorios, la que no habría de trasladar a la parte contraria. Sin embargo, en el evento que el fallador de instancia considere necesarios tales elementos de prueba para definir una eventual condena, podrá hacer uso de la facultad oficiosa de prueba para obtenerlos de parte de quien por ley debe conservar tal información, que no es el empleador.
8. **demás documentos que consten pagos.** requerimiento satisfecho por la accionada al adosar aquellos que informó estaba en su poder, sin que la parte contraria demuestre los factores o emolumentos faltantes.

En suma, verificada la suficiencia de los elementos de prueba conforme a la delimitación del litigio, sin que la parte actora pruebe que las piezas documentales

que reclama se encuentren en poder de la empresa Mabe Colombia SAS, ni haya estado presta a obtener los reportes de cotizaciones al sistema de seguridad social y los certificados de ingresos y retenciones, imprósperas son las súplicas del recurrente, conclusión expuesta por el fallador de instancia y que se confirma por esta corporación.

Resta por indicar que se grava en costas a la parte actora al resultar vencida en sus argumentos de apelación. Se tasan las agencias en derecho en la suma de \$300.000 en favor de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, se **confirma de forma total la providencia recurrida que dio por clausurada la etapa probatoria**. Lo anterior sin perjuicio de la facultad oficiosa que le asiste al juez para decretar pruebas si lo estima necesario para emitir una decisión de fondo

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante de las que se tasan las agencias en derecho en la suma de \$300.000 en favor de la parte demandada.

Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen para la continuación del trámite. Lo resuelto se notifica en estados.

Los Magistrados,



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

Sin firma por ausencia justificada
ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ

CERTIFICO: Que la anterior providencia fue notificada en Estados publicados por medios digitales el 28 de marzo de 2023